



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2.024)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05266 31 03 001 2023 00180 01

Proceso: Ejecutivo
Demandante: MARTHA EDILMA HERNÁNDEZ PALACIO (C.C. 43'736.862).
Demandada: CARLOS ALFREDO ESTRADA ZULUAGA (C.C. 8'045.920).
Extracto: 1. Para librar orden de pago, el título aportado debe contener una obligación clara, expresa y exigible, tal como lo prevé el artículo 422 del C. G. del P., de no ser así, la orden ejecutiva será negada.
2. Del control de legalidad de cara a librar mandamiento de pago.
Confirma según lo expuesto.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto calendarado el veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Envigado.

ANTECEDENTES

De la acción:

Demandante y demandado son socios en la empresa ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA HERNÁNDEZ S.A.S., en la que cada uno cuenta con el 50% de las acciones, respecto a lo que el 6 de febrero de 2.019 suscribieron “*CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES*”, por medio del cual la primera vendió al segundo su respectiva participación, consignándose en el correspondiente documento precio, plazo y forma de pago, así como lo referente al registro accionario.

Que como el comprador no canceló lo convenido, la hoy actora lo demanda ejecutivamente, pretendiendo se libre mandamiento de pago por lo adeudado, así como por los intereses moratorios (archivo 03).

De la decisión atacada y los recursos:

El *a quo* negó la orden de pago deprecada, aduciéndose que el documento soporte de la acción y denominado “*CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES*”, carece de exigibilidad ya que en él existen obligaciones mutuas y correlativas, siendo necesario que previamente se acuda a proceso declarativo, para obtener certeza sobre el incumplimiento o no de lo pactado (archivo 04).

Frente a lo anterior la parte actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, argumentando en síntesis que:

1. Otrora por la misma causa y con el mismo contrato demandó a ESTRADA ZULUAGA, asunto que le correspondió al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD de Envigado (radicado 05266 40 03 002 2020 00098 00), en el que el 12 de febrero de 2.020 se libró orden de pago por once (11) cuotas, como fueron las vencidas entre el 5 de marzo de 2.019 y el 5 de enero de 2.020.

Que en tal asunto el 13 de diciembre de 2.022 se desarrolló la audiencia de instrucción y juzgamiento, en la que dicha autoridad judicial sostuvo que si bien el negocio jurídico se celebró (venta de acciones), el mismo estaba viciado de nulidad al no estar conforme a los Estatutos de la Sociedad, decisión esta que apeló, la cual se está tramitando ante el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Envigado, por lo que deprecó oficiar para que dichas diligencias sean remitidas a este proceso.

2. Que el demandado es el representante legal de ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA HERNÁNDEZ S.A.S., por lo que él es quien tiene la facultad para realizar la inscripción de las acciones, sin que su negligencia en el pago pueda ser trasladada a la actora.
3. Según la cláusula 4ª del contrato de venta, el registro de las acciones en favor del comprador se haría una vez la vendedora confirme el pago de la suma pactada en la cláusula 2ª; sin embargo, se trata de una condición fallida ante el no pago del deudor (artículo 1538 C. C.), por lo que no se puede predicar el incumplimiento de esta, por lo mismo “... *la condición deber declarada como cumplida, cuando se efectuó el pago, bien sea voluntariamente o coercitivamente*” (archivo 06).

Resolviendo el recurso horizontal el *a quo* mantuvo la decisión, sosteniendo que el título en cobro debe reunir las exigencias del artículo 422 del C. G. del P., y que de las cláusulas 3ª y 4ª del contrato ejecutado se colige la imprecisión de la obligación, pues al tratarse de una venta bajo condición, la cual dijo no está cumplida, es ausente el elemento de exigibilidad.

Iteró que ante cargas correlativas, el cumplimiento del ejecutado generaría el cumplimiento de la hoy ejecutante; no obstante, en este caso, debe acudirse a juicio declarativo para que se establezca el incumplimiento de la obligación a cargo del ejecutado, y luego sí imponerle su acatamiento forzado.

Finalmente, en cuanto al proceso ejecutivo 2020 00098, según el historial del sistema de gestión de la Rama Judicial, si bien inicialmente se libró el mandamiento de pago, el 30 de marzo de 2.023 se declaró la prosperidad de las excepciones formuladas por el ejecutado, por lo que contrario a lo expuesto por la recurrente, no se trataba de una obligación clara, expresa y exigible, sin que aquí se deba proceder en igual forma. Subsidiariamente concedió la alzada (archivo 07).

Así las cosas, por tratarse de providencia apelable según lo normado por el artículo 321.4 del C. G. del P., se procede a resolver de plano el recurso, tal como lo prevé el artículo 326 ibídem, previas:

CONSIDERACIONES

Del artículo 320 procesal civil se tiene que el recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, sin perjuicio del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 430 del C. G. del P. visto armonía con el artículo 430 ídem, de lo que la doctrina ha indicado:

“(…) respecto a la revisión oficiosa de los títulos que debe agotar el juzgador natural al momento de ocuparse de resolver si existe mérito para continuar el cobro, insistentemente se ha sostenido que:

“...es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisión del «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia.

“Reliévese, además, que el análisis del aludido sustrato jurídico-material que todo litigio de ejecución precisa como requisito sine qua non, ha de darse de necesidad, así no haya sido ello específico motivo de la alzada, si no se olvida que el pronunciamiento del ad quem, conforme al precepto 328 del Código General del Proceso, lo es «sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio», siendo tal una de ellas conforme así lo ha decantado la jurisprudencia (...).

“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. (...).”
Subrayado adrede. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, STC1018-2023, ver también STC12264-2023.

El argumento para negar la orden de pago, fue que el documento aportado como soporte de la acción no reúne las características que impone el artículo 422 del C. G. del P., el que señala que pueden demandarse las obligaciones claras, expresas y exigibles, que sean vinculantes respecto a quien se demanda, exigencias de las que doctrina ha dicho:

“Respecto a los requisitos que deben cumplirse para demandar ejecutivamente el pago de una obligación, el artículo 422 del Código General del Proceso contempla que *«[p]ueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles **que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, (...) y los demás documentos que señale la ley (...)**»* (negrillas propias). Sobre ellos, la Corte ha dicho:

*“La claridad de la obligación, consiste en que **el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico.** Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.*

*“La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. **Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.**”* Subraya, negrilla y cursiva en el texto. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia STC3298-2019, reiterada en la STC13670-2022.

El título ejecutivo en recaudo está contenido en un solo documento titulado “CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES”, o sea, es singular, y como tal se tendrá.

De entrada ha de decirse que el hecho que en otro proceso se hubiera proferido orden ejecutiva en un asunto entre las mismas partes y con base en el documento en cobro ello no constituye precedente vinculante para las presentes¹, máxime cuando según la misma actora reconoce que se trata de un trámite en curso, en el que a propósito se apeló una decisión que le fue desfavorable.

¹ El precedente judicial se concibe como: “... una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior” Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006, citada en STC11892-2023.

De todos modos, en los asuntos ejecutivos el instrumento en cobro de entrada debe satisfacer los requisitos previstos en el artículo 422 del C. G. del P., pues los elementos esenciales del título ejecutivo deben hallarse en él, donde si ello no se satisface, la orden de pago ha de ser negada.

En cuanto al documento base de la ejecución y titulado “**CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES**”, conforme al cual la demandante se obligó a transferir en favor del demandado las 3.125 acciones ordinarias que aquella posee en ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA HERNANDEZ S.A.S., lo cual se haría una vez el accionado pagara el equivalente a \$250'00.000.00, en la forma y plazo convenida. Las cláusulas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de dicho convenio quedaron así:

“Primera: OBJETO. La VENDEDORA se obliga a transferir al COMPRADOR a título de venta TRES MIL CIENTO VEINTICINCO (3.125) acciones ordinarias que posee en la sociedad ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA HERNANDEZ S.A.S., las cuales se encuentran suscritas y pagadas.

“Segunda: VALOR. El COMPRADOR cancelará a la VENDEDORA la suma total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$250.000.000 COP), equivalentes al valor nominal de las 3.125 acciones ordinarias.

“Tercera. PLAZO Y FORMA DE PAGO. El COMPRADOR, tendrá un plazo de cincuenta y ocho (58) meses, contados a partir de la firma del presente contrato, para cancelar el valor total de la venta de acciones, en la forma, cuotas y valores relacionados a continuación:

“-VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$20.000.000 COP) serán pagados en especie, con la entrega real y material del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea HILUX, de placas MLO 749.

“-57 cuotas mensuales de CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. (\$4.000.000) cada una, las cuáles empezarán a pagarse el día seis (06) de febrero de 2019, y continuarán pagándose los primeros cinco (5) días calendario de cada mes.

“-Una cuota 58 por valor de DOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.000.000).

“Parágrafo 1: Los pagos deberán ser realizados en la cuenta de ahorros Bancolombia número 23435506658, la cual se encuentra a nombre de la señora MARTHA EDILMA HERNÁNDEZ PALACIO.

“Parágrafo 2: Se entenderá efectivo el pago en especie de los VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$20.000.000 COP), una vez se realice el correspondiente traspaso del relacionado vehículo.

“Cuarta. TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD. La transmisión de las acciones descritas en el numeral “tercero” de las manifestaciones, se realizará mediante la inscripción en el libro de registro de accionistas de la sociedad ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRADA HERNANDEZ S.A.S., una vez la VENDEDORA confirme el pago efectivo de la suma relacionada en la cláusula “segunda” y de acuerdo a la forma descrita en la cláusula “tercera”.
Subraya adrede.

En lo anterior se observan convenciones relacionadas, pero sucesivas, es decir, una antecede a la otra, por lo que se considera el artículo 1609 del C.C. que enseña: *“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.*

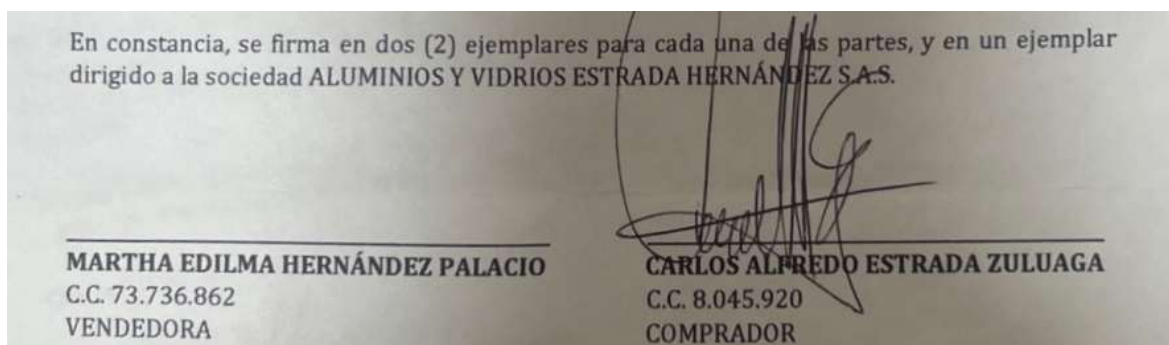
Lo relevante es que la obligación de la hoy actora dependía del pago que debía hacer el demandado, pero tal solución es la que se reclama que no se produjo, por lo que aquella en principio podía reclamar ejecutivamente la obligación de la que es titular, sentido en que el Tribunal se aparta de la argumentación de primera instancia cuando expuso que previo a la ejecución debió acudirse a proceso declarativo.

No obstante, en la misma línea del elemento exigibilidad que también fue esgrimido por el *a quo* para negar la orden ejecutiva, en la cláusula 3ª del contrato soporte de la acción, se especificó el *“PLAZO Y FORMA DE PAGO”*, detallándose uno y otro de manera diferente.

En cuanto al primero, el plazo, se dijo que el comprador *“tendrá un plazo de cincuenta y ocho (58) meses, contados a partir de la firma del presente contrato, para cancelar el valor total de la venta de acciones (...)”*, subraya adrede; y, respecto a la forma de pago se acordó que sería parte en especie con un vehículo, y parte con cuotas mensuales pagaderas mensualmente a partir del 6 de febrero de 2019, cada una en los cinco primeros días calendario de cada mes.

Entonces, de lo pactado se tiene que, aparte del vehículo, las cuotas pactadas debían solucionarse en cincuenta y ocho (58) mensualidades, aunque en las presentes solo se reclaman ejecutivamente de la cuota 12 a la 53; sin embargo, de la literalidad del instrumento, el plazo para pagar “*el valor total*” del negocio era CINCUENTA Y OCHO (58) meses.

Tal número de mensualidades equivale a cuatro (4) años y diez (10) meses, tiempo que empezó a contarse desde “*la firma del presente contrato*”, el que a propósito no fue suscrito por la demandante, pues como se extrae del mismo documento:



Siendo así las cosas, si la acción se apoya en un contrato bilateral (artículo 1496 C.C.), queda en entredicho el momento a partir del cual se contabiliza tal vencimiento; pero es más, el hoy demandado suscribió tal pacto el 19 de febrero de 2.019, por lo que considerando los cincuenta y ocho (58) meses, el período para que pagara se extendió hasta el 19 de diciembre de 2.023.

También debe considerarse que de la redacción del documento en cobro, no brinda claridad sobre vencimientos parciales o la inclusión de la cláusula aceleratoria (artículo 69 de la Ley 45 de 1990²), según

² Tal norma reza: “*Cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando comprendan solo intereses*”.

la cual la acreedora tendría la facultad para declarar vencido el plazo anticipadamente ante el incumplimiento del deudor, y por tanto exigir de inmediato la integridad de la obligación.

De lo anterior se colige que la obligación que se pretender cobrar, no era exigible para la fecha en que se presentó la demanda (11 de julio de 2.023 –ver archivo 02), argumentos con los cuales se confirmará la decisión atacada, ya que el documento soporte de la ejecución carece de los elementos previstos en el artículo 422 del C. G. del P..

Sin condena en costas al no advertirse que se causaron.

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Envigado, por lo aquí motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO